Ganadores y perdedores

En una situación político-económica tan complicada como la que atravesamos, lo mínimo que cabe exigir es claridad en las opciones y equidad en el reparto de cargas. En efecto, el oneroso trayecto hasta conseguir una recuperación aceptable de los niveles de actividad y ocupación, que sería la premisa de todo lo demás, hace necesaria una gran dosis de transparencia en los asuntos públicos. Porque las decisiones son difíciles y los costes sociales de enorme entidad. El camino emprendido de *devaluación interna*, largo y tortuoso, está generando desequilibrios y desgarros sociales sin freno, que llevan a una parte considerable de la sociedad a la impotencia y a la desesperación. No hay un reparto equitativo de sacrificios. Hay, por el contrario, ganadores y perdedores, un escenario que mina la confianza, la cohesión y las bases mismas de la aspiración a una sociedad decente.

Por un lado están los parados sin esperanza de reintegrarse a la vida laboral, los afectados o amenazados por expedientes de regulación de empleo, los jóvenes que no pueden acceder a una primera ocupación, las personas que se han quedado sin recursos, los jubilados o futuros jubilados que ven amenazadas sus pensiones, los autónomos que han visto arruinarse sus expectativas, los empresarios sin acceso al crédito y que han de afrontar una drástica caída de las cifras de negocio. O en otro terreno, los afectados por las diversas modalidades de estafas bancarias, como las preferentes o subordinadas, o bien las víctimas de ese drama social que son los desahucios. Y por otro lado están unas categorías sociales que prácticamente no se ven afectadas por la crisis, porque viven muy alejadas de las zonas de riesgo. Bien porque usufructúan privilegios ancestrales que ninguna legislación ha osado poner en cuestión, y que consideran prácticamente de derecho natural, bien porque forman parte de instituciones sistémicas e intocables, bien porque acumularon rentas especulativas de mucha cuantía en los años de la burbuja inmobiliaria, sin que ninguna medida sobre beneficios extraordinarios o cualquier otra requisitoria haya pedido nunca cuentas.

Por supuesto que el panorama de *ganadores y perdedores* es mucho más denso y abigarrado, pero no es este el lugar adecuado para analizarlo con la profundidad y el matiz debidos. Solo para llamar la atención acerca de la desigual e injusta distribución de cargas en una crisis de la que la mayoría se siente objeto pasivo, y que aparentemente no tiene responsables. Como si fuera una maldición divina.

Ante esta situación, y a manera de alivio o maniobra de distracción, se carga todos los días indiscriminadamente contra los políticos y la política. Muchas veces justificadamente, sin duda, a la vista del alto grado de corrupción que han revelado casos como Gürtel, Bárcenas, Emarsa, Palau, Nóos, y tantos otros, que mantienen ocupados (y a veces desbordados) a la policía, la fiscalía y los tribunales de justicia. Pero la generalización y las afirmaciones simplistas y sumarias que descalifican la política y a los políticos son peligrosas. Altamente peligrosas, sobre todo en un país con una cultura política democrática no precisamente sólida ni –pudiéramos decir– irreversiblemente inscrita en el ADN de la sociedad. Tampoco tiene ningún sentido la atribución indiscriminada de culpas al "otro", a las instancias europeas, a factores externos, lo que sería excusa perfecta para obviar los enormes errores cometidos en la orientación de la política interna, en la opción por un modelo económico inviable. O para no reconocer la extrema laxitud en el gasto, en el endeudamiento y en determinados comportamientos sociales, que son también una parte del problema.

La crisis económica que ya dura cinco años –la «gran depresión de los años diez» – es sinuosa y responde a determinantes internos y externos que no se pueden tratar con reduccionismos, si bien hay responsables y causas que conviene conocer. En las páginas del dossier de este número de *Pasajes* se aborda toda su complejidad y se ofrecen análisis sugerentes tanto de sus antecedentes y factores causales como de su evolución hasta el momento presente y su horizonte previsible. En los documentados artículos de Ernest Reig, José Víctor Sevilla, Manuel Illueca, Jordi Maluquer y Andrés García Reche se aportan datos y elementos de análisis que la hacen más inteligible. De eso se trata, en definitiva. De comprender mejor un proceso complejo, de enorme gravedad y desenlace incierto que está afectando al tejido social y que está generando un extendido sufrimiento personal y una drástica reducción de expectativas de futuro.

La devaluación interna, que implica hoy por hoy pérdida de empleo, rebajas salariales, congelación o reducción de pensiones, desmontaje del Estado del Bienestar y freno a las políticas sociales, cierre de empresas y de organismos, no va a la par con una sensible minoración de las situaciones de privilegio. La legitimación social y política pierde en este empeño. Solo un grado más alto de transparencia en los asuntos públicos y un programa decidido de rectificación y reparto equitativo podrían repararla.